Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, de fecha dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente electrónico conformado con motivo del Recurso de Revisión 02261/INFOEM/IP/RR/2024, interpuesto por XXXX, persona Recurrente o Particular, en contra de la respuesta del Sujeto Obligado, Tribunal Electoral del Estado de México, a la solicitud de acceso a la información pública 00048/TRIEEM/IP/2024, se emite la presente Resolución, con base en los Antecedentes y Considerandos que se exponen a continuación:

**A N T E C E D E N T E S**

**I. Presentación de la solicitud de información**

Con fecha primero de abril de dos mil veinticuatro **(ya que si bien, se registró el veinticinco de marzo del mismo año, también lo es que fue inhábil, por lo que, se tuvo por recibido, el día hábil subsecuente),** el Particular presentó una solicitud de acceso a la información pública, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo sucesivo el SAIMEX, ante el Tribunal Electoral del Estado de México,mediante la cual requirió:

***“DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA***

*Solicito conocer el tramite que el pleno a dado a las denuncias que se han interpuesto en contra de la Titular de la Contraloria del Tribunal Electoral del Estado de México; quiero se me proporcione el acuerdo en el que se decidió que magistrada o magistrado daría tramite a dichas denuncias, así como la sanción que se le impuso a dicha titular porque no es posible que en los casos que resuelven en materia jurisdiccional que se resuelven de manera pronta y cuando se trata al interior del Tribunal se hacen de la vista gorda no obstante que dicha contralora en una generadora de violentadora por razón genero y de derechos humanos” (Sic)*

***Modalidad de Entrega*** *“A través del SAIMEX”.*

**II. Respuesta del Sujeto Obligado**

Con fecha veintidós de abril de dos mil veinticuatro, el Sujeto Obligado notificó, a través del SAIMEX, la respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, a través del Titular de la Unidad de Transparencia en los términos siguientes:

*“…*

*Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XLIV, 12, ,24, último párrafo, 50, 51, 53, fracciones II, III, IV, V y VI, 150 y 167, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Ley Local de Transparencia); y en atención a la Solicitud de Información recibida el uno de abril del año en curso, enlazada al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), con número de folio 00048/TRIEEM/IP/2024. Al respecto, hago de su conocimiento que por medio del SAIMEX, se remite la respuesta de la persona servidora pública habilitada de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de México, competente para tal propósito.*

*…”*

El Sujeto Obligado adjuntó en archivo *“.pdf”* y *“Word”* (por duplicado) los documentos que se describen a continuación:

I) Oficio número TEEM/UIPPET/511/2024, del veintidós de abril de dos mil veinticuatro, suscrito por el Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación, Evaluación y Transparencia, el cual, de manera general señaló que remitía la respuesta proporcionada por la persona servidora pública habilitada de la Secretaría General de Acuerdos.

II) Oficio número TEEM/SGA/257/2024, del quince de abril de dos mil veinticuatro, suscrito por la Secretaría General de Acuerdos, por medio del cual señaló de manera general lo siguiente:

“… *le informo que la naturaleza jurídica y las obligaciones constitucionales del Tribunal Electoral del Estado de México, de conformidad con los artículos 116, fracción IV, inciso c), numeral 5o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM); 13, párrafos segundo y séptimo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (en adelante Constitución Local); y 383 y 390, fracción I, del Código Electoral del Estado de México (en adelante Código Electoral), son las siguientes:*

*[Transcripción de artículos]*

*En este sentido, en los asuntos que son presentados ante este Órgano Jurisdiccional, se realiza un análisis, con la finalidad de determinar jurisdicción y ámbito de competencia de este Tribunal, ya que constituye un requisito fundamental para el conocimiento y resolución de los mismos.*

*Por cuanto hace a: “… quiero se me proporcione el acuerdo en el que se decidió que magistrada o magistrado daría tramite a dichas denuncias, así como la sanción que se le impuso a dicha titular …” (sic), le informo que en la página web institucional de este Tribunal Electoral, se cuenta con un apartado de “Estrados” en los cuales puede consultar los diferentes acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional (Anexo único), en la siguiente liga electrónica:* [*https://teemmx.org.mx*](https://teemmx.org.mx)*.*

*Respecto de: “… porque no es posible que en los casos que resuelven en materia jurisdiccional que se resuelven de manera pronta y cuando se trata al interior del Tribunal se hacen de la vista gorda no obstante que dicha contralora en una generadora de violentadora por razón genero y de derechos humanos…” (sic), se precisa que ello no estriba en el ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública, con la finalidad de obtener algún documento, generado, administrado o poseído por la Secretaría General de Acuerdos, en razón de las funciones y atribuciones que le son conferidas en las leyes de la materia, pues se tratan de manifestaciones y declaraciones de carácter subjetivo vertidas por la persona particular, que nada tienen que ver con el derecho de acceso a la información pública, por tanto, no se colman con la entrega de información y/o documentos; en consecuencia, esa porción de la solicitud, no es atendible a través de esta respuesta.*

*En ese sentido, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, ha emitido el criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno del órgano garante, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto dispone:*

*…*



*” (Sic)*

**IV. Interposición del Recurso de Revisión**

Con fecha veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, se recibió en este Instituto, a través del SAIMEX, Recurso de Revisión interpuesto por la parte Recurrente, en contra de la respuesta por el Sujeto Obligado, a la solicitud de información,en los siguientes términos:

***“ACTO IMPUGNADO***

*negativa de informar” (Sic).*

***“RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD***

*negativa de información” (Sic).*

**V. Trámite del Recurso de Revisión ante este Instituto**

**a) Turno del Medio de Impugnación.** El veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, el SAIMEX, asignó el número de expediente **02261/INFOEM/IP/RR/2024**, al medio de impugnación que nos ocupa, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Órgano Garante y lo turnó al Comisionado Ponente Luis Gustavo Parra Noriega, para los efectos del artículo 185, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**b) Admisión del Recurso de Revisión.** El dos de mayo de dos mil veinticuatro, se acordó la admisión del Recurso de Revisión interpuesto por el Recurrente en contra del Sujeto Obligado, en términos del artículo 185, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual fue notificado a las partes el tres del mismo mes y año, a través del SAIMEX, en el que se les otorgó un plazo de siete días hábiles posteriores a la misma, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y formularan alegatos.

**c) Informe Justificado.** El quince de mayo de dos mil veinticuatro, se recibió, a través de SAIMEX, en el apartado de Informe Justificado del Sujeto Obligado, los archivos que se describen a continuación:

I) Oficio número TEEM/UIPPET/708/2024, del quince de mayo de dos mil veinticuatro, suscrito por el Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación, Evaluación y Transparencia, el cual, de manera general señaló que remitía el Informe Justificado proporcionado por la persona servidora pública habilitada de la Secretaría General de Acuerdos.

II) Oficio número TEEM/SGA/380/2024, del trece de mayo de dos mil veinticuatro, suscrito por la Secretaría General de Acuerdos, por medio del cual señaló de manera general lo siguiente:

*“…*

*No obstante, la información proporcionada y privilegiando en todo momento, el derecho de acceso a la información, en atención al principio de máxima publicidad se le informa a la persona ahora recurrente* ***que, con fundamento en el artículo 192, fracción III de la Ley de Transparencia, se modifica la respuesta otorgada*** *a la solicitud de información pública con número de folio* ***00048/TRIEEM/IP/2024,*** *en los siguientes términos:*

*Respecto de “Solicito conocer el tramite que el pleno a dado a las denuncias que se han interpuesto en contra de la Titular de la Contraloría del Tribunal Electoral del Estado de México;…” (Sic), le informo que la naturaleza jurídica y las obligaciones constitucionales del Tribunal Electoral del Estado de México…*

*…*

*En este sentido, debe considerarse que la información y documentación contenida en cualquier tipo de denuncia en contra de personas servidoras públicas de este órgano jurisdiccional, contienen datos cuya difusión vulneraría su esfera privada, debido a que,* ***se podría dañar su honor, buen nombre, imagen y reputación.***

*...*

*Asimismo, cualquier denuncia implica una investigación por la autoridad competente y el pronunciamiento específico sobre alguna persona servidora pública, vulneraría lo establecido en el artículo 99 de la Ley de Responsabilidades del Estado de México y Municipios, el cual dispone que las autoridades investigadoras deberán tener acceso a toda la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo aquélla que las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere la presente Ley, con la obligación de mantener la misma la* ***reserva o secrecía,***  *conforme a lo que determinen las leyes.*

*No obstante, o referido anteriormente y lo establecido en el artículo 191, fracción VI de la Ley Local de Transparencia, el cual establece que el recurso será desechado por improcedente cuando de trate de una consulta, o trámite en específico, a fin de favorecer el derecho de acceso a la información pública, se informa* ***el trámite que sigue este órgano Jurisdiccional ante CUALQUIER asunto competencia de su jurisdicción,*** *es el siguiente:*

1. *Recepción a través de la Oficialía de partes de la Secretaría General de Acuerdos.*
2. *Secretaría General de Acuerdos genera el turno a Ponencia según corresponda.*
3. *La Ponencia realiza el análisis correspondiente, con la finalidad de determinar jurisdicción y ámbito de competencia de este Tribunal, ya que constituye un requisito fundamental para el conocimiento y resolución de los mismos.*
4. *El Pleno emite la Resolución correspondiente.*

*Por cuanto hace a: “…quiero que se me proporcione el acuerdo en el que se decidió que magistrada o magistrado daría tramite a dichas denuncias,…” (sic), le informo que en la página web institucional de este Tribunal Electoral, se cuenta con un apartado de “Estrados” en los cuales puede consultar los diferente acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, en la siguiente liga electrónica:* [*https://teemmx.org.mx*](https://teemmx.org.mx)*.*

*…*

*Respecto de: “…así como la sanción que se le impuso a dicha titular…” me permito informarle que derivado de la búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esta Secretaría General de Acuerdos, no se advierte la información relacionada con la señalada en su solicitud;*

*…”*

**d) Vista del Informe Justificado.** El siete de octubre de dos mil veinticuatro, se dictó acuerdo por medio del cual se puso a la vista del Recurrente el Informe Justificado entregado por el Sujeto Obligado, el cual fue notificado a las partes, el mismo día, a través del SAIMEX. **Cabe señalar que el Particular fue omiso en realizar manifestación alguna.**

**e) Ampliación de plazo para resolver.** El siete de octubre de dos mil veinticuatro, el Comisionado Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 181, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, acordó ampliar por un periodo de quince días hábiles, el plazo para resolver el Recurso de Revisión que nos ocupa; acto que fue notificado a las partes el catorce de agosto del mismo año, mediante el SAIMEX.

Este organismo garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos, que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

 Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable. En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

1. **Complejidad del asunto:** La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
2. **Actividad Procesal del interesado:** Acciones u omisiones del interesado.
3. **Conducta de la Autoridad:** Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.
4. **La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso:** Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro **“TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”**, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

**“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.”** consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

**“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”**, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

**f) Cierre de instrucción.** El catorce de octubre de dos mil veinticuatro, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se emitió el acuerdo por medio del cual se declaró cerrada la instrucción y se determinó pasar los expedientes a resolución, en términos de lo dispuesto en los artículos 185, fracciones VI y VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, acto que fue notificado a las partes, mediante el SAIMEX, el mismo día.

En razón de que fue debidamente sustanciado e integrado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo a los siguientes:

**C O N S I D E R A N D O S**

**PRIMERO**. **Competencia**

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5°, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones I, II, III, IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1°, 8°, 9°, 10, 56 y 42, fracciones I, II y III, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°, 2°, fracciones II y IV; 13, 29, 36, fracciones I y II; 176, 178, 179, 181 párrafo tercero, 185, 188 y 189 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 7°, 9°, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO**. **Causales de improcedencia y sobreseimiento.**

Este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente (acorde con el Criterio orientador en la Tesis de Jurisprudencia “**IMPROCEDENCIA**.” **(Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, 1985, pág. 262),** el cual establece que debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, sea que las partes lo soliciten o no, por ser una cuestión de orden público; de tal suerte, deberá ser desechado cualquier Recurso de Revisión que actualice alguno de los supuestos establecidos en el artículo 191 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por ser improcedente.

En el presente caso, no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia establecidas en el ordenamiento jurídico previamente señalado, toda vez que: el recurso fue presentado dentro del plazo establecido en el artículo 178 de la Ley la materia; además, que este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio de defensa presentado por el Recurrente ante otra instancia; no existió prevención alguna; la veracidad de la respuesta no formó parte del agravio; ni se realizó una consulta o ampliación a los alcances del requerimiento informativo.

**Causales de sobreseimiento**

Por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento.

El artículo 192 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, señala las causales por las cuales se puede sobreseer en todo o en parte, el Recurso de Revisión; así, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza algún supuesto de sobreseimiento; lo anterior, en virtud de que no hay constancias en el expediente en que se actúa, de que el Recurrente se haya desistido del recurso, haya fallecido, sobreviniera alguna causal de improcedencia, que el Sujeto Obligado hubiese modificado o revocado el acto impugnado o bien, haya quedado sin materia.

En ese orden de ideas, toda vez que no ha quedado sin materia el Recurso de Revisión al rubro, se considera procedente entrar al fondo del presente asunto.

**TERCERO. Determinación de la Controversia**

Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el Particular, solicitó conocer respecto de las denuncias que se han interpuesto en contra de la Titular de la Contraloría del Tribunal Electoral del Estado de México, lo siguiente:

1. Trámite que el Pleno ha dado y acuerdo de turno a la Magistrada o Magistrado que conocería de las Denuncias; y,
2. Sanción impuesta.

En atención a lo solicitado, el Tribunal Electoral del Estado de México,a través del Titular de la UIPPET, proporcionó la respuesta de la servidora pública habilitada de la Secretaría General de Acuerdos, la cual proporcionó lo que a su parecer colmaba lo solicitado por el Particular. Derivado de ello, el Particular, se inconformó de manera general por la negativa a la información solicitada, lo cual, actualiza el supuesto previsto en el artículo 179, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Así las cosas, una vez admitido y notificado el Recurso de Revisión a las partes, el Sujeto Obligado mediante informe justificado modificó su respuesta; por su parte el Recurrente, fue omiso en presentar alegatos o manifestaciones que en derecho correspondan.

Lo hasta aquí expuesto, se desprende de las documentales que obran en el expediente de referencia, materia de la presente Resolución, consistentes en: la solicitud de acceso a la información; la respuesta proporcionada por el Poder Legislativo; el escrito recursal y el Informe Justificado; instrumentales que se toman en cuenta a efecto de resolver el presente medio de impugnación, conforme a lo dispuesto por el artículo 185, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO. Marco normativo aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública**

El artículo 6°, Apartado A), fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, dispone en su artículo 70, la información que se considera corresponde a las Obligaciones de Transparencia, la cual debe estar disponible para cualquier persona de manera permanente y actualizada.

En este sentido, los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, establecen los formatos para dar cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, así como los plazos de actualización.

Por su parte, en materia local, el artículo 5°, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es coincidente con la Constitución Federal, en el sentido de la publicidad de toda la información, con la única restricción de proteger el interés público, así como la información referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las personas, con las excepciones que establezca la ley reglamentaria.

Por su parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Reglamentaria del artículo 5° de la Constitución Local), establece lo siguiente:

El artículo 12, que, quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma.

El artículo 18, que, los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, considerando desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen.

El artículo 19, que, se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados y en caso de que dichas facultades no se hayan ejercido, se deberá motivar la respuesta en función de las causas que motivaron tal circunstancia.

**QUINTO. Estudio de Fondo**

Expuestas las posturas de las partes, se procede al análisis del agravio hecho valer por la ahora Recurrente, concerniente a la negativa de la información solicitada por parte del Sujeto Obligado; para lo cual, en un principio es necesario aclarar que la pretensión del ahora Recurrente es obtener, información específica respecto de las denuncias que se han interpuesto en contra de la Titular de la Contraloría del Tribunal Electoral del Estado de México.

De inicio, es de señalar que el Recurrente manifestó en su solicitud “…*porque no es posible que en los casos que resuelven en materia jurisdiccional que se resuelven de manera pronta y cuando se trata al interior del Tribunal se hacen de la vista gorda no obstante que dicha contralora en una generadora de violentadora por razón genero y de derechos humanos.” (Sic)*.

Al respecto, es de precisar que se consideran manifestaciones subjetivas ya que las mismas no se pueden colmar con la entrega de un documento, sino más bien, se pretende hacer que el Sujeto Obligado realice un pronunciamiento, a través de la entrega de una razón o razonamiento, lo cual no es algo que la ley establezca como atribución, derecho o facultad, pues ello implicaría un juicio de valor referente a un cuestionamiento realizado, los cuales, al constituir interrogantes, inquietudes y manifestaciones se satisfacen vía derecho de petición.

Lo anterior, toma sustento la Jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, de los Tribunales Colegiados de Circuito, localizada en la página 1406, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, marzo 2011, Novena Época, que establece lo siguiente:

***“DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS.*** *El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa.”*

De la Jurisprudencia citada, se advierte que el derecho de petición, es una prerrogativa individual consagrada en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de que cualquier ciudadano o persona, presente una petición de manera pacífica y respetuosa (pregunta, consulta, duda, entre otros), ante una autoridad, por lo que, tiene derecho de recibir una respuesta.

En ese orden de ideas, según Trujillo, Humberto (2019), en el “Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública” (p. 122), el derecho de petición, es una prerrogativa constitucional que tienen las personas para solicitar o reclamar a las autoridades públicas, de forma individual o a través de un grupo de personas; la cual dichas entidades están obligadas a recibirlas, proponer un acuerdo escrito que especifiqué los tiempos y la forma en que será contestada la consulta y reclamación y así ofrecer una respuesta. **De tal circunstancia, se puede colegir que respecto al requerimiento realizado, se trata de un derecho de petición, y, por lo tanto, no puede ser atendido vía del derecho de acceso a la información pública.**

Ahora bien, es importante traer a colación lo estipulado en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que señala en su artículo 13, que es autónomo, de carácter permanente con personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones que será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, funcionará en Pleno, se compondrá de cinco Magistraturas; además, contará con una Contraloría General adscrita al Pleno, que tendrá a su cargo la fiscalización de las finanzas y recursos del Tribunal Electoral; su titular será nombrado por la Legislatura del Estado.

Por su parte, el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de México, señala en sus numerales 67, 68, 69, 70 y 71, que los servidores públicos del Tribunal, podrán ser sancionados en la forma, términos y por las causas de responsabilidad administrativa previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, aplicadas por el Contralor General, a excepción de la destitución del cargo e inhabilitación que serán facultad exclusiva del Pleno.

De lo anterior, la Contraloría General es quien inicia el procedimiento disciplinario para identificar, investigar y determinar las responsabilidades administrativas en que pudieron haber incurrido los servidores públicos del Tribunal, con motivo de las denuncias o quejas que se presenten o de la revisión de los asuntos de su competencia, además, para la determinación de las responsabilidades, la Contraloría General o en su caso el Pleno, deberán otorgarle al servidor respectivo, la garantía de audiencia, corriéndole traslado del escrito de denuncia o queja para que manifieste lo que a su derecho corresponda y ofrezca pruebas de descargo.

Por su parte, el artículo 19, del Reglamento Interno del Tribunal, señala las atribuciones del Pleno, entre ellas, resolver los medios de impugnación de su competencia, previstos en el Código Electoral del Estado de México, conocer y resolver sobre la inhabilitación de los servidores públicos del Tribunal, por las causas de responsabilidad previstas en este Reglamento.

Conocido lo anterior, el Sujeto Obligado a través de la servidora pública habilitada de la Secretaría General de Acuerdos, que en términos del Código Electoral del Estado de México, específicamente en el artículo 395, cuenta con las atribuciones de llevar bajo su responsabilidad el archivo y oficialía de partes, turnar los asuntos para su sustanciación y resolución a los secretarios sustanciadores o a los magistrados, según corresponda y autorizar, con su firma, las actuaciones del Tribunal Electoral; mediante respuesta, se limitó a señalar que en la página web institucional del Tribunal Electoral, se cuenta con un apartado de “Estrados” en los cuales puede consultar los diferentes acuerdos emitidos por el órgano jurisdiccional, razón por la cual, este Instituto realizó una consulta a dicha liga electrónica y de la cual remite únicamente a la página principal del Sujeto Obligado.

Posterior a ello, a través de la presentación del informe justificado, el Sujeto Obligado modificó su respuesta y señaló lo siguiente:

* La información y documentación contenida en cualquier tipo de denuncia en contra de personas servidoras públicas, contienen datos cuya difusión vulneraría su esfera privada, debido a que, se podría dañar su honor, buen nombre, imagen y reputación.
* Cualquier denuncia implica una investigación por la autoridad competente y el pronunciamiento específico sobre alguna persona servidora pública, vulneraría lo establecido en el artículo 99 de la Ley de Responsabilidades del Estado de México y Municipios.
* El trámite que sigue este órgano Jurisdiccional ante cualquier asunto competencia de su jurisdicción, es el siguiente:
1. Recepción a través de la Oficialía de partes de la Secretaría General de Acuerdos.
2. Secretaría General de Acuerdos genera el turno a Ponencia según corresponda.
3. La Ponencia realiza el análisis correspondiente, con la finalidad de determinar jurisdicción y ámbito de competencia de este Tribunal, ya que constituye un requisito fundamental para el conocimiento y resolución de los mismos.
4. El Pleno emite la Resolución correspondiente
* Derivado de la búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que obran en esta Secretaría General de Acuerdos, no se advierte sanción respecto a la Titular de la Contraloría.

En principio, cabe mencionar que el artículo 6°, Apartado A), fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que **la información que se refiere a la vida privada y los datos personales,** será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Igualmente, el segundo párrafo del artículo 16 de la Carta Magna dispone que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos; así como, a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Acorde con lo anterior, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 116, dispone que se considera información confidencial la que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable. De la misma manera, el artículo 5°, fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, prevé que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será pública; no obstante, aquella referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las personas, será protegida a través de un marco jurídico rígido, de tratamiento y manejo de datos personales.

Por su parte, el artículo 24, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, precisa que los Sujetos Obligados serán los responsables de proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial.

En concordancia con lo previo, el artículo 143, fracción I, de la Ley previamente citada, establece que la información privada y los datos personales, concernientes a una persona física identificada o identificable son confidenciales.

Asimismo, en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, prevé que para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a la información confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, excepto cuando **i)** la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público, **ii)** por ley tenga el carácter de pública, **iii)** exista una orden judicial, **iv)** por razones de seguridad nacional y salubridad general o **v)** para proteger los derechos de terceros o cuando se transmitan entre sujetos obligados en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales.

En términos de lo expuesto, la documentación y aquellos datos que se consideren confidenciales, serán una limitante del derecho de acceso a la información, siempre y cuando:

1. Se trate de **datos personales**; esto es, información concerniente a una **persona** **física** y que ésta sea identificada o identificable.
2. Para la difusión de los datos, **se requiere el consentimiento del titular**.

En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 3°, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, con relación el diverso 4°, fracciones XI y XII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se advierte que son datos personales, la información concerniente a una persona física identificada o identificable (cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier documento informativo físico o electrónico), establecida en cualquier formato o modalidad.

Además, en el artículo 5° de dicho ordenamiento jurídico, **establece que es la Ley aplicable para todo tratamiento de datos personales.**

En ese contexto, los artículos 6°, 7°, 8° y 14 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios disponen que los responsables del tratamiento de datos personales, deben observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad; además, que dicho tratamiento deberá obedecer exclusivamente a sus atribuciones legales y con el consentimiento de su titular, además de que debe estar justificado en ley (principio de finalidad).

Así, un dato personal es cualquier información que pueda hacer a una persona física identificada e identificable, como su nombre o imagen. Asimismo, la doctrina desarrollada a nivel internacional, respecto del tema de datos personales, establece que también las preferencias, gustos, cualidades, opiniones y creencias, constituyen datos personales. En este sentido, cualquier información que por sí sola o relacionada con otra permita hacer identificable a una persona, es un dato personal, susceptible de ser clasificado.

En este contexto, la confidencialidad de los datos personales, tiene por objetivo establecer el límite del derecho de acceso a la información a partir del derecho a la intimidad y la vida privada de los individuos. Sobre el particular, el legislador realizó un análisis en donde se ponderaban dos derechos: el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales *versus* el interés público de conocer el ejercicio de atribuciones y de recursos públicos de las instituciones y es a partir de ahí, en donde las instituciones públicas deben determinar la publicidad de su información.

De tal suerte, las instituciones públicas tienen la doble responsabilidad, por un lado de proteger los datos personales y por otro, darles publicidad cuando la relevancia de esos datos sea de interés público. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido como derechos fundamentales de las personas, el derecho a la intimidad y a la propia imagen, en el siguiente criterio:

*“****DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA.*** *Dentro de los derechos personalísimos se encuentran necesariamente comprendidos el* ***derecho a la intimidad y a la propia imagen****, así como a la* ***identidad personal*** *y sexual; entendiéndose por el primero,* ***el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida*** *y,* ***por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona****, familia, pensamientos o sentimientos;**a la* ***propia imagen, como aquel derecho de decidir, en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás****; a la identidad personal, entendida como el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo; y que implica, por tanto, la identidad sexual, al ser la manera en que cada individuo se proyecta frente a sí y ante la sociedad desde su perspectiva sexual, no sólo en cuanto a sus preferencias sexuales sino, primordialmente, en cuanto a cómo se percibe él, con base en sus sentimientos y convicciones más profundos de pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer y que, de acuerdo a ese ajuste personalísimo en el desarrollo de cada individuo, proyectará su vida en todos los ámbitos, privado y público, por lo que al ser la sexualidad un elemento esencial de la persona y de su psique, la autodeterminación sexual forma parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, la parte de la vida que se desea mantener fuera del alcance de terceros o del conocimiento público. Por consiguiente,* ***al constituir derechos inherentes a la persona, fuera de la injerencia de los demás, se configuran como derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana, ya que pueden reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada, como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que los lesionen por lo que, si bien no son absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie un interés superior.****”*

En ese sentido, es derecho de todo individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona **(derecho a la intimidad).** Asimismo, el **derecho a la propia imagen** es el derecho de decidir, de forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás.

Por otro lado, en cuanto al **derecho al honor**, la jurisprudencia número 1a./J. 118/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 3, de febrero de 2014, página 470, de la Décima Época, materia constitucional, dispone:

*“****DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA.*** *A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible definir al honor como el* ***concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social.*** *Todo individuo, al vivir en sociedad, tiene el derecho de ser respetado y considerado y, correlativamente, tiene la obligación de respetar a aquellos que lo rodean. En el campo jurídico esta necesidad se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada individuo de pedir que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de responder a este tratamiento. Por lo general, existen dos formas de sentir y entender el honor: a) en el aspecto subjetivo o ético, el honor se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad; y b) en el aspecto objetivo, externo o social, como la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece, es decir, el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de nosotros.”*

De la tesis transcrita se desprende que el honor es el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social.

En el campo jurídico, es un derecho humano que involucra la facultad de cada individuo de ser tratado de forma decorosa. Este derecho tiene dos elementos, el subjetivo, que se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad, y en un sentimiento objetivo, que es la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. **En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece.**

Derivado de lo anterior, se desprende que dar a conocer la existencia de una denuncia en trámite en contra de una persona específica, en caso de que existan, constituye información confidencial que afecta su esfera privada, puesto que podría generar una percepción negativa de éste, ocasionando un perjuicio en su **honor, intimidad y buena imagen,** pues la afectación es para el propio servidor público, situación que no afecta a terceros.

Por lo que, proporcionar el pronunciamiento, podría generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, afectando su prestigio y su buen nombre, pues la sociedad podría calificar a dicho servidor público, como ineficiente o corrupto, lo cual **daña su vida privada y profesional**, mismas que forman parte de su intimidad. Por lo cual, se considera procedente la clasificación, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, del pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo, referente a la existencia de denuncias en trámite por constituir datos personales confidenciales.

Es de aclarar que al ordenar que se clasifique el pronunciamiento, lo que se debe entregar al Recurrente es un acuerdo de clasificación en donde se le indique que no existe la posibilidad ni siquiera de confirmar si existen o no denuncias en contra de la servidora pública que hayan sido o no turnadas a la autoridad competente; en este caso, el acuerdo de clasificación indicará que no es posible atender su solicitud, ni en sentido positivo, ni afirmativo. Además, en atención al principio de máxima publicidad ya se le indicó el trámite que sigue una denuncia y que no existen sanciones firmes impuestas a la servidora pública.

**SEXTO. Decisión**

Con fundamento en el artículo 186, fracciones III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Instituto considera procedente **MODIFICAR la** respuesta otorgada por el Tribunal Electoral del Estado de México, a efecto de que proporcione el acuerdo de clasificación emitido por el Comité de Transparencia.

**Términos de la Resolución para conocimiento del Particular.**

Se le hace del conocimiento la persona Recurrente que, en el presente asunto, se le da le concede parcialmente la razón, pues el Sujeto Obligado no hizo entrega de la información solicitada mediante respuesta. Sin embargo, a través de la presentación del informe justificado, modificó su respuesta y proporcionó parte de la información solicitada, de la cual se desprende que no debe revelar si la servidora pública de la cual se solicita información cuenta o no con denuncias.

Finalmente, la labor del Instituto, es apoyar a la población a acceder a la información pública y garantizar la protección de sus datos personales.

Por lo expuesto y fundado, este Pleno:

**R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Se **MODIFICA** la respuesta entregada por el Tribunal Electoral del Estado de México, a la solicitud de información00048/TRIEEM/IP/2024, por resultar **FUNDADAS** las razones o motivos de inconformidad hechos valer por la persona Recurrente, en términos de los considerandos QUINTO y SEXTO de la presente Resolución.

**SEGUNDO**. Se **ORDENA** al Ente Recurrido, a efecto de que entregue, a través del SAIMEX, lo siguiente:

* El Acuerdo emitido por el Comité de Transparencia, en donde de manera fundada y motivada, confirme la clasificación del pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo, sobre la existencia de alguna sanción a la Titular de la Contraloría del Tribunal Electoral del Estado de México, respecto de denuncias, al primero de abril de dos mil veinticuatro, en términos de los artículos 49, fracción II, 132, fracción II, 143, fracción I y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**TERCERO. NOTIFÍQUESE POR SAIMEX** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, para que conforme al artículo 186, último párrafo, 189, segundo párrafo, y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III, 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el Sujeto Obligado de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**CUARTO. NOTIFÍQUESE** **POR SAIMEX** a la persona Recurrente la presente Resolución, asimismo, se hace de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios podrá promover el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables, o, promover Recurso de Inconformidad, en términos de los artículos 159 y 160, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ASÍ LO RESUELVE, POR **UNANIMIDAD** DE VOTOS EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA, EN LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.